

Violencia en el hospital

Las cifras son elocuentes y, al mismo tiempo, profundamente inquietantes: 21 denuncias por agresiones a funcionarios del Hospital Clínico de Magallanes en apenas tres meses. No se trata de episodios aislados ni de situaciones excepcionales. Es la evidencia de una violencia que se ha instalado en uno de los espacios más sensibles de cualquier sociedad, cual es el sistema de salud.

Lo que relatan médicos, enfermeras y técnicos no admite relativizaciones. Golpes, escupos, amenazas, mordeduras e incluso el uso de elementos cortopunzantes improvisados por pacientes forman parte de una rutina que dista radicalmente de la vocación de cuidado que define a la salud pública.

Lo más preocupante no es sólo la gravedad de los hechos, sino la normalización del temor. Los equipos completos reco-

nocen trabajar con miedo, en un entorno donde la agresión se ha vuelto una posibilidad permanente.

Aquí hay un punto que no puede ser ignorado. Cuando quienes están llamados a cuidar la vida deben preocuparse primero por su propia seguridad, el sistema entero comienza a deteriorarse. No sólo se afecta la calidad de la atención. Se erosiona el vínculo esencial entre paciente y personal de salud, basado en la confianza y el respeto mutuo.

El problema, además, revela una dimensión estructural que va más allá del hospital. Parte importante de los episodios más graves -según los propios equipos clínicos- estaría asociada a pacientes ingresados por orden judicial sin criterios médicos claros, lo que tensiona el rol del sistema sanitario y lo obliga a asumir funciones que no le corresponden. El hospital no es una extensión del sistema penal ni puede

transformarse en un espacio de custodia sin las condiciones adecuadas para ello.

A ello se suma una debilidad persistente en materia de seguridad. Accesos sin control efectivo, infraestructura vulnerable y una presencia policial limitada configuran un escenario donde la violencia encuentra condiciones para expandirse. La reciente discusión sobre la instalación de botones de pánico o el eventual retorno de Carabineros de punto fijo son medidas necesarias, pero evidencian que el problema ya alcanzó un nivel crítico.

Sin embargo, sería un error reducir esta crisis a un asunto de seguridad interna. Lo que ocurre en el Hospital Clínico de Magallanes es reflejo de una tensión social más amplia, dada por una convivencia deteriorada, una creciente incapacidad para canalizar conflictos y un debilitamiento del respeto hacia la auto-

ridad -en este caso, sanitaria— que antes parecía incuestionable.

También hay un componente silencioso, pero no menos grave: el subregistro. Muchos funcionarios evitan denunciar por temor a represalias, especialmente en una región donde el hospital es prácticamente el único centro de alta complejidad. Ese dato revela que la cifra de 21 denuncias podría ser sólo la superficie de un problema aún mayor.

La pregunta de fondo es incómoda, pero inevitable: ¿qué ocurre cuando el Estado no logra garantizar condiciones mínimas de seguridad en sus propios recintos de salud? La respuesta no es sólo administrativa; es política y social. Porque la violencia en hospitales no sólo afecta a los trabajadores, sino también a los pacientes, que ven deteriorarse el entorno en el que buscan atención y alivio.